

INTERVENCIÓN INICIAL DEL MINISTRO DE FOMENTO  
Desayuno informativo Europa Press  
Junio 2010

Si hay algo que define el tiempo que estamos viviendo es la incertidumbre. La última vez que estuve en este foro, hace unos nueve meses, les relataba como España y el resto de países del G20 estábamos apuntalando la recuperación con potentes políticas de estímulo.

Y si nos remontamos unos meses más atrás, podemos recordar como todos los organismos internacionales señalaban que la acción concertada de los países había salvado la crisis financiera y así mitigado sus efectos en la economía real.

En estos dos años, pasamos de una crisis financiera localizada en EEUU, a una de la economía real que se extendió a todo el planeta y, ahora, nos situamos ante una crisis de deuda, que encuentra en Europa su foco más agudo.

Así que hemos ido saltando de crisis en crisis, ante el desconcierto de Gobiernos y ciudadanos.

De cada respuesta que ofrecen los expertos, emanan otros interrogantes. Y de cada medida que toman los Gobiernos, surgen otra serie de problemas a los que dar solución.

Se ha escrito mucho sobre los orígenes externos de esta crisis, sobre cómo las tormentas originadas en Wall Street han dejado al descubierto la imprudencia de mantener unos mercados financieros profundamente desregulados.

Ahora se está evidenciando que Europa no había previsto unos mecanismos para defender a uno de los elementos más importantes del proyecto común, el euro.

Y en España, estamos pagando la factura de dejar que el sector de la construcción fuese el milagro de nuestro crecimiento. Pero ya estamos combatiendo todas estas debilidades.

Si la incertidumbre hace que la rumorología interesada cotice al alza, le hacemos frente con el mejor antídoto: la transparencia.

Por eso, España ha liderado la propuesta para que se hagan públicas las pruebas de resistencia de los bancos Europeos.

Y bajo Presidencia Española impulsamos el mayor avance en la gobernanza económica común desde la introducción de la moneda única, para mejorar su protección y la regulación financiera.

De esta manera, durante este semestre de Presidencia la Unión Europea ha tomado varias medidas:



- Hemos establecido un fondo de 750 mil millones de euros para garantizar la deuda de los países de la zona euro;
- Hemos mejorado los mecanismos de coordinación a nivel europeo;
- Hemos acordado la puesta en marcha de un impuesto sobre las instituciones financieras, así como proponer en el seno del G20 una tasa sobre las transacciones financieras internacionales.

Por otra parte, además de estas acciones de coordinación durante nuestra Presidencia Europea, España ha sido uno de los primeros países en presentar sus planes de ajuste presupuestario.

Y por ello hemos recibido el reconocimiento de todos los miembros de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional. Un reconocimiento que contrasta con el comportamiento del líder de la oposición durante toda la crisis.

Porque todos sabemos que si el voto en contra a las medidas de ajuste hubiera tenido éxito, la solvencia de España habría quedado tan gravemente comprometida que habría desencadenado una situación crítica en toda la Eurozona.

No hay fin partidista que justifique votar contra la economía de más de 46 millones de españoles y casi 500 millones de europeos. Al final es una simple cuestión de responsabilidad.

Pero esta crisis exige algo más que responsabilidad y respuestas nuevas y rápidas. Reclama que nos replanteemos las bases sobre las que hemos construido nuestro sistema económico, financiero y nuestro Estado de Bienestar.

En la historia del capitalismo se han ido sucediendo cíclicamente periodos de crisis. La mayor parte de ellas eran periodos de recesión en los que siempre se veía la luz al final del túnel, y que una vez superados, han permitido que volviéramos a hacer las cosas, más o menos, como siempre.

Pero las grandes crisis como ésta, y como la sufrida en el año 29 del siglo pasado, son largas, impredecibles y desconcertantes. Dado que son causa y resultado de múltiples transformaciones, cuya confluencia impide apenas descifrar el camino de salida.

Transformaciones, como las tecnológicas, que afectan a todos los ámbitos. Desde nuestra forma de relacionarnos, hasta la velocidad en la que se producen las transacciones económicas.

Transformaciones en el orden económico mundial, en el que oriente se ha convertido en la fábrica del mundo al tiempo que occidente consume y se endeuda.

Y cambios profundos como el climático, que cuestiona nuestra economía y nuestro estilo de vida; o el envejecimiento de la población, que pone en entredicho la sostenibilidad de los sistemas de bienestar.



Por todo ello, esta crisis se ha ido convirtiendo en un ejercicio de ensayo y error, que se prolongará hasta que encontremos un nuevo equilibrio en nuestras relaciones económicas, sociales y políticas.

Porque es muy posible que aquello que siempre funcionó, aquello que creímos que siempre funcionaría, ya no lo vuelva hacer nunca. Algo que en sí mismo no es necesariamente malo.

Está comprobado que en épocas como ésta es cuando surge el mayor número de empresas innovadoras y con éxito a largo plazo.

Y al igual que en el ámbito empresarial, este es el momento para que los gobiernos con verdadera vocación reformista se empleen a fondo, para sentar las bases del futuro.

Por eso, estos años que estamos viviendo, serán los de las grandes reformas que marcarán el destino de los próximos cincuenta años en España y en Europa.

Si hacemos un breve repaso a las grandes reformas realizadas en las últimas décadas, podemos saber quién ha demostrado una verdadera vocación reformista.

Todos sabemos cual fue el gobierno que estableció las bases del Estado de Bienestar, con la universalización de la educación, la sanidad y las pensiones.

Y también podemos comparar la incorporación a Europa y la reconversión industrial, que acometieron los gobiernos de Felipe González, con las reformas llevadas a cabo por el gobierno conservador del Partido Popular.

En democracia, la derecha ha gobernado este país ocho años. Ocho años que coincidieron con un momento expansivo en la economía.

Una expansión que ni comenzó ni se detuvo con su mandato. Gestionaron la mitad del camino del ciclo alcista más amplio de nuestra economía y en cambio su balance de reformas, de reformas estructurales, ha sido escaso.

Completaron el proceso de consolidación fiscal que había iniciado el ministro Solbes en 1993 y para ello vendieron la participación que tenía el Estado en la mayoría de las grandes empresas rentables.

Acometieron un proceso de privatizaciones, que yo no discuto, sin una regulación que fomentase la competencia, haciendo que la esencia de la transformación empresarial de aquel gobierno fuese privatizar sin liberalizar.

Más allá de este proceso, hay muy poco que añadir a sus reformas. En realidad, su gran legado fue alimentar una burbuja inmobiliaria, a la que bautizaron como milagro económico, y gestionar una coyuntura irrepetible: con bajos tipos de interés, gran entrada de fondos europeos y mano de obra barata inmigrante.



Y lo que es peor, confundieron esa coyuntura con la realidad estructural de nuestra economía, sin hacer las reformas que tanto reclaman ahora para subsanar nuestro gran Talón de Aquiles: la baja productividad.

Esa fue la economía que heredó el gobierno actual. Una economía de apariencia saludable, con buenas cifras de crecimiento, pero que había agudizado sus desequilibrios y debilidades estructurales.

Debilidades que hemos tratado de corregir haciendo un esfuerzo por capitalizar nuestra economía, triplicando la inversión pública en Investigación y Desarrollo y duplicando el gasto en educación y en modernizar nuestras infraestructuras de transporte.

Hicimos una apuesta rotunda por el gasto productivo, para facilitar el crecimiento de nuestra competitividad.

Además de las políticas de inversión, abordamos cambios regulatorios esenciales, como la reforma de la ley del suelo, la reforma del sistema de defensa de la competencia, o la importante liberalización en el sector de servicios.

Y seguimos aplicando una intensa agenda de reformas, desde las más globales, como la Ley de Economía Sostenible, a las sectoriales, como la reestructuración del sistema financiero, en especial de nuestras cajas de ahorro, o como las que está desarrollando mi propio departamento referidas al sistema aeroportuario y portuario, cuya ley se aprueba definitivamente mañana en el Senado.

En definitiva, además del impulso que hemos dado en el campo de la ampliación de derechos, este Gobierno acredita una hoja de servicios inequívocamente reformista para afrontar los próximos retos.

Por supuesto, esto no quiere decir, que no hayamos cometido errores. Los hemos cometido. Pese haber sido el único gobierno de la democracia que ha conseguido tres superávits presupuestarios, no evaluamos adecuadamente hasta que punto nuestra economía, como el resto de economías occidentales, estaba viviendo por encima de sus posibilidades.

Porque ahora el problema de la deuda no es tanto su tamaño, que por cierto es en dos tercios privada, como su propia naturaleza.

Hasta ahora, la recaudación de las Administraciones Públicas se sostenía, en gran medida, por unos ingresos que nunca se volverán a producir. Y en ese contexto se alimentó una carrera de sucesivas rebajas fiscales que no tenían en cuenta el carácter transitorio de esos elevados ingresos.

Esta realidad la cuantifica acertadamente el último informe de la Comisión Europea que señala que el 75% del incremento de los ingresos fiscales entre 1995 y 2006 era de naturaleza transitoria y claramente vinculado a un insostenible boom del mercado inmobiliario.



Este informe constata que es en el pinchazo de esta gran burbuja donde se encuentra la explicación a la mayor parte de nuestro déficit presente, y no en las políticas de estímulo del gobierno.

Por eso uno de los grandes retos al que nos enfrentamos es el de configurar un nuevo equilibrio entre ingresos y gastos de las administraciones públicas. Un equilibrio que compromete a todas las administraciones.

El plan de ajuste aprobado en el Congreso el pasado 27 de mayo, es una reforma realista y ambiciosa para contener nuestro déficit.

Pero no nos podemos quedar ahí. Vamos avanzar drásticamente en la eficiencia de nuestra Administración.

Si en estos últimos años nuestras empresas han ganado en eficiencia por la propia presión del mercado, esta presión competitiva no se ha trasladado a las administraciones.

La gran disponibilidad de recursos públicos proveniente de los ingresos fiscales coyunturales nos ha llevado a una mentalidad de la abundancia, que tenemos que transformar. Y creo que, como Ministro de Fomento, es mi obligación decirlo.

Porque el de las infraestructuras de transporte ha sido, precisamente, uno de los ámbitos en donde, probablemente, la disonancia entre nuestras expectativas y nuestras capacidades reales era más acusada.

En un país como España, con una presión fiscal más de 6 puntos por debajo de la media de la zona Euro, estábamos exigiendo un nivel de dotación de infraestructuras mucho mayor que el de cualquiera de los países más ricos del mundo occidental.

Y, en gran medida, hemos estado financiando esa fuerte inversión con los recursos recaudados a través del boom inmobiliario.

Por eso, estamos desarrollando sendos planes de austeridad y de eficiencia que nos permitirán hacer más con menos:

- Vamos a reducir el gasto corriente y el gasto de personal de aquí a 2013 en un 40% en el Ministerio de Fomento y las empresas de su grupo, que supondrá un ahorro de 1.200 millones de euros.
- Y con la aplicación del plan de eficiencia vamos a reducir un 22% de media los costes de construcción de nuestras infraestructuras. En el último año, hemos comenzado a aplicar en autovías criterios precisos de austeridad, lo que ha permitido que el coste por kilómetro de los proyectos aprobados en 2010 en carreteras se haya reducido ya un 17%.

Pero no va a ser suficiente con incrementar nuestra eficiencia, tenemos que replantearnos el modo en qué financiamos nuestras infraestructuras y, sobre todo, su conservación.



Tenemos que entender que no todo es socialmente necesario. Y por poner un ejemplo, nada hay más antisocial y antiecológico que financiar trenes que van prácticamente vacíos con los recursos de todos.

Por eso debemos de romper algunos prejuicios sobre el papel del Estado en la financiación de las infraestructuras, y plantearnos si queremos que las paguen todos los ciudadanos independientemente del uso que hagan de ellas, o que contribuyan a financiarla en mayor medida los que se benefician de su uso.

En definitiva, esta crisis es el momento para revisar el sentido y la racionalidad de algunas inercias.

Hemos podido cometer errores, dejarnos arrastrar por herencias perniciosas, pero tampoco podemos construir el futuro haciendo continuamente un ajuste de cuentas con el pasado. Los errores sirven para aprender de ellos, de lo contrario no sirven para nada.

Y tal como señalaba al principio de mi intervención, debemos de introducir reformas que garanticen la sostenibilidad de nuestro modelo económico y social.

Y en este ámbito quiero señalar algo que considero importante: el Gobierno de España acometerá estas reformas, las está acometiendo ya, desde un enfoque socialdemócrata.

Somos los más interesados en defender el modelo social de mercado sobre el que se ha cimentado el crecimiento europeo en los últimos 50 años. Pero la mayor traición que podríamos hacer a este modelo es dejarlo inalterado y esperar a que se hunda por su propio peso.

Uno de los mayores éxitos de nuestro estado de bienestar europeo ha sido el aumento de la esperanza de vida. Un éxito que esconde también uno de los mayores desafíos para su sostenibilidad: el envejecimiento de la población.

El Gobierno no ignora el reto demográfico y abordará la reforma de nuestro sistema de pensiones.

Queremos contar con el acuerdo de los grupos parlamentarios, en un debate sereno y riguroso. Porque, si bien, la reforma de las pensiones no es urgente, sí es absolutamente necesaria.

Y si estamos decididos a reformar nuestro sistema de pensiones, es porque consideramos que es una conquista social irrenunciable mantener un sistema público que garantice una renta a las personas que acceden a la jubilación.

Nuestro estado de bienestar requiere reformas y requiere sobre todo de una economía dinámica y competitiva que sea capaz de crear otras fuentes de riqueza, generar crecimiento y crear nuevos yacimientos de empleo.

Y es preocupante que algunos que aspiran a volver a gobernar, quieran poner en práctica la misma política económica que ha agudizado tanto nuestros desequilibrios.



Sobre todo en este momento. Cuando se trata de algo más que adelantar la recuperación.

Es el momento para sentar las bases de una nueva forma de crecer, de una nueva forma de organizar nuestro estado de bienestar, nuestras empresas y nuestras administraciones.

Una responsabilidad que exige, ante todo, vocación, experiencia y voluntad reformista, como la que está desplegando este gobierno.

Y, en este contexto, de todas las reformas que tenemos que desarrollar, la reforma laboral es probablemente una de las más importantes. No se trata sólo del insostenible número de parados.

Algo no funciona cuando nuestro mercado de trabajo no es capaz de generar empleo estable para la generación de jóvenes mejor preparada de nuestra historia.

Nuestro marco de relaciones laborales estaba pensado para una economía basada en la industria, cuando solo trabajaba el hombre, en empleos generalmente poco cualificados, pero que acostumbraban a ser para toda la vida.

Ahora nuestra economía es muy diferente. Nuestras empresas para poder competir globalmente necesitan ser cada día más flexibles, las mujeres se han incorporado masivamente al mercado laboral y la cada vez mejor formación de nuestros jóvenes exige otro tipo de empleos y una mayor movilidad laboral.

Impulsar el progreso, implica adecuar las leyes que rigen nuestra sociedad a los nuevos cambios y demandas sociales. Y las leyes que ordenan las relaciones laborales ni son, ni pueden ser una excepción.

El problema estructural de nuestro mercado laboral es que tenemos dos mercados de trabajo, no uno.

Uno es muy rígido para las empresas y para los trabajadores, aunque garantice a estos últimos una gran protección y seguridad laboral.

Mientras el otro es muy flexible para las empresas, pero muy precario e inseguro para sus trabajadores, que son, sobre todo, jóvenes y mujeres.

Con esta reforma laboral queremos tener un único mercado laboral, no dos.

Un mercado de trabajo que, sobre todo, impulse la contratación estable y que muestre la suficiente flexibilidad para que la reducción de costes de las empresas no se haga sólo vía empleo.

Es una reforma laboral que, como han reconocido todos los organismos internacionales y el resto de países miembros de la Unión Europea, va en la buena dirección.



Y pese a que no se lograra alcanzar finalmente un acuerdo, el trabajo de diálogo de los agentes sociales ha sido útil y ahora el resto de partidos tienen la oportunidad de señalar sus aportaciones en el trámite parlamentario.

Tenemos que romper viejos prejuicios sobre las relaciones laborales, como esa antigua tendencia a ver el marco laboral como un ajuste de cuentas entre empresarios y trabajadores.

Los empresarios tienen que entender las necesidades laborales y vitales de sus trabajadores, pero a su vez, los trabajadores y sindicatos tienen que entender que la competitividad de la empresa juega en su propio beneficio.

Y aunque esta reforma no será suficiente para resolver todos nuestros problemas en relación con el empleo, desde luego, allanará mucho el camino.

No hay una medida que lo solucione todo. En eso estamos de acuerdo. Sólo un camino de continuas reformas podrá fortalecer nuestra competitividad y nuestro estado de bienestar.

Pero si algo hemos aprendido en estos años es que no podemos tener miedo al cambio. Porque siempre que nuestro país, en su reciente historia de democracia ha abordado reformas, hemos salido fortalecidos.

Pocos países de Europa han experimentado transformaciones tan intensas como los que ha asumido España en los últimos treinta años. Por eso, tengo el pleno convencimiento de que estamos lo suficientemente preparados para afrontar con éxito los retos que el futuro nos depara en los próximos años.

